

Licencias médicas y tamaño del Estado

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha destapado una realidad que, aunque aparentemente conocida por algunos, a una gran mayoría sigue generando una profunda indignación: miles de funcionarios públicos haciendo uso de licencias médicas para viajar o vacacionar, con el consiguiente impacto tanto para las arcas como el correcto funcionamiento del aparato estatal.

En los últimos días se conoció que el documento, que señala a más de 25 mil funcionarios a nivel nacional, incluye a comunas como Los Ángeles, donde 220 empleados públicos aparecen involucrados, de los cuales 111 corresponden a la Dirección de Educación Municipal, 103 a la Dirección Comunal de Salud y seis a la Municipalidad. En algunos casos, la evidencia incluye registros migratorios que prueban viajes al extranjero o recreacionales dentro del país.

La reacción ciudadana y política no se ha hecho esperar y, en el ámbito local, concejales de diversas bancadas han manifestado su “rechazo categórico”, calificando la práctica de “intolerable” y han exigido formalmente sumarios administrativos, investigaciones a fondo y sanciones efectivas, destacando que esto representa un “uso indebido de recursos del Estado”, una “falta a la probidad” y una “burla inaceptable para todos los chilenos que cada día madrugan, trabajan y pagan sus impuestos con esfuerzo”.

Las entidades responsables, en tanto, han confirmado estar al tanto y han comprometido tomar las medidas correspondientes, incluyendo sumarios y la potencial desvinculación de los involucrados.

Más allá del escándalo particular y la necesaria aplicación de sanciones, este caso reactiva un debate todavía más profundo: el del tamaño y la eficiencia del Estado. Así, una primera pregunta cae de cajón: ¿Es posible que la aparente facilidad con la que miles de funcionarios pueden abusar de un derecho como la licencia médica sea un síntoma de una estructura estatal sobredimensionada y, además, con un grave déficit de control y fiscalización interna?

Este escándalo no solo vulnera la confianza ciudadana en sus instituciones y demuestra una preocupante falta de probidad en algunos funcionarios, sino que también proporciona un nuevo argumento a favor de una revisión crítica del tamaño, la estructura y, sobre todo, la eficiencia y el control dentro del aparato estatal.

La interrogante sobre si miles de funcionarios que pueden permitirse estar de “vacaciones” con cargo al Fisco son realmente necesarios, se vuelve central y requiere ser abordada con seriedad y profundidad, con miras al buen uso de los recursos que proceden del bolsillo de todos los chilenos.